El gobierno optará por demoler al INE si cuenta con los votos. Es el gran riesgo político de 2027.



LUIS CARLOS UGALDE
luiscarlosugalde@integralia.com.mx

Reparar o demoler

La crisis de corrupción de Guadalupe Taddei es una oportunidad para reconducir al INE: castigar la corrupción, recuperar la colegialidad y nombrar a una presidenta con liderazgo e integridad. Pero también entraña el riesgo de que el gobierno utilice el escándalo para presentar al instituto como una estructura podrida desde su origen, una simulación neoliberal que debe desaparecer.

A pesar del daño y de la captura política gradual de su Consejo General, el INE sigue siendo un activo de la democracia mexicana. Una cosa es su órgano de dirección y otra, muy distinta, su estructura profesional y sus procedimientos electorales.

El INE es mucho más que sus consejeros. Su servicio profesional electoral tiene 2,571 plazas en oficinas centrales, 300 juntas distritales y 32 locales. Sus integrantes ingresan por concurso y avanzan mediante evaluaciones y promociones por mérito. Muchos acumulan décadas de experiencia. Coordinan la capacitación electoral, la instalación de casillas, la distribución de materiales y los cómputos distritales. Son la columna vertebral del instituto.

El INE organiza elecciones mediante procedimientos estandarizados, controles y mecanismos de seguridad contra errores y manipulaciones. La selección aleatoria de funcionarios de casilla agrega una garantía de imparcialidad. López Obrador intentó modificar esa estructura y sus procedimientos mediante dos reformas electorales, pero ambas fracasaron. La estructura operativa sobrevivió, aunque su órgano de dirección ha sufrido una creciente captura política. Por eso, la institución puede recuperarse.

El INE es recuperable si ocurren tres cosas. Primero, investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos Taddei, funcionarios y empresas involucrados por acción u omisión. Segundo, que la Cámara de Diputados elija por consenso a una presidenta honorable, experimentada y con liderazgo. Tercero, que los consejeros recuperen su autonomía, se sacudan las correas de transmisión política y actúen con imparcialidad y apego a la ley.

El principal obstáculo es que el gobierno es rehén de su narrativa. Ha buscado trasladar el debate: de la presunta corrupción de Taddei a la supuesta corrupción histórica del INE. Un escándalo de funcionarios concretos se convierte así en prueba de que toda la institución está podrida. Bajo esa lógica, no basta sancionar a los responsables: habría que desaparecer al instituto.

El gobierno ha llegado al extremo de atribuir a Lorenzo Córdova la responsabilidad política de la llegada de Taddei y de afirmar que las irregularidades en la contratación de materiales electorales se remontan a 1989, cuando ni siquiera existía el IFE. También ha revivido las acusaciones de fraude electoral: a las de 2006 y 2012 agrega ahora la elección de 2000. La Presidenta sugirió que el triunfo de Fox resultó de un pacto secreto con Washington.

Si se acepta que la corrupción es estructural y que el fraude ha sido una constante histórica, cambiar a los dirigentes ya no parece suficiente: la narrativa conduce a justificar la desaparición del INE.

Ayer, la Presidenta anunció que volverá a presentar una reforma electoral después de las elecciones de 2027. Insistió en modificar el sistema de legisladores plurinominales, reducir el financiamiento a los partidos y disminuir el costo de las elecciones. Aunque no anunció su desaparición, esa narrativa puede justificar cambios mucho más profundos. Si Morena y sus aliados obtienen la mayoría calificada, tendrán los votos para impulsar una reforma constitucional que transforme o sustituya al INE. En lugar de reparar la institución, podrían demolerla y construir otra a la medida del poder.

No sería una ruta novedosa. López Obrador hizo algo semejante con el Poder Judicial. En 2023 y 2024 desacreditó a la Suprema Corte y a los jueces. Después de las elecciones, con la mayoría calificada de Morena, vino la reforma judicial: primero se minó la legitimidad de la institución y luego se transformó su estructura.

Entre reparar y demoler, temo que el gobierno optará por demoler si cuenta con los votos. La gran paradoja es que una crisis de corrupción que debería servir para rescatar al INE termine siendo utilizada para justificar su desaparición. Ese es un gran riesgo político de 2027.